

[Imprimir Página Web](#)

El golpe inacabado de Venezuela

Román D. Ortiz

ARIN 011-2002 - 5.6.2002

Tras la intentona golpista del 11 de abril, los llamamiento al diálogo con la oposición del presidente Hugo Chávez no han frenado el creciente deterioro del clima político en Venezuela. La fallida intentona golpista no resolvió definitivamente el enfrentamiento entre chavistas y antichavistas. Como consecuencia, durante las pasadas semanas, las tensiones entre estos grupos se han vuelto a recrudecer en lo que parece el prólogo de una nueva crisis dentro de una inacabada lucha por el poder. La primera víctima de este nuevo estallido podría ser el propio Chávez.

Unas fuerzas armadas divididas

El fallido golpe del 11 de abril transformó el escenario político venezolano dejando fuera de juego a algunos actores mientras acrecentaba la relevancia de otros. En este sentido, la sedición del 11-A ha reforzado la influencia política del estamento castrense mientras recortaba proporcionalmente el peso real de la clase política civil.

Dentro de esta tendencia general, el peso de las distintas familias políticas de la Fuerza Armada Nacional (FAN) ha cambiado a raíz de la intentona golpista. Así, los sectores derechistas de las fuerzas armadas han emergido del 11-A profundamente debilitados. Durante la sedición de abril, muchos de sus integrantes se sumaron al presidente de la patronal venezolana, Pedro Carmona, en el intento por reemplazar el régimen chavista con un gabinete de corte conservador. El fracaso de estos planes y la restitución de Chávez en el poder han sido acompañados del descabezamiento de este sector que ha visto cómo la mayor parte de sus miembros eran relevados de sus puestos de mando e investigados por la justicia.

El fallido golpe ha tenido consecuencias menos demoledoras para un amplio sector de las fuerzas armadas de talante institucionalista que respaldó la destitución de Chávez; pero se negó a secundar el intento de Carmona de establecer un régimen autoritario. Dentro de este grupo, los mandos que participaron en el derrocamiento del presidente más abiertamente han sido destituidos de sus cargos y se enfrentan a procesos judiciales. Éste ha sido el caso del general Efraín Vásquez Velasco, comandante en jefe del Ejército durante el golpe. Sin embargo, buena parte de los oficiales de esta facción aceptaron el regreso del presidente Chávez al poder sólo a cambio de una garantía de impunidad por su participación en la sedición. Únicamente un pacto de estas características explica que el general Lucas Rincón Romero que participó en la rebelión anunciando públicamente la dimisión de Chávez no sólo haya quedado exento de procesamiento judicial sino que además haya sido nombrado ministro de Defensa en la remodelación del gobierno venezolano del pasado abril.

Finalmente, el fracaso del 11-A ha reforzado las posiciones de los sectores izquierdistas de las fuerzas armadas más afines a Chávez. Ciertamente, este grupo de militares no puede ser calificado estrictamente de chavista puesto que ha mantenido posturas críticas frente a ciertas políticas del gobierno bolivariano. En cualquier caso, la orientación marcadamente nacionalista y populista de estos oficiales les ha convertido en único apoyo del régimen. Los máximos representantes de este grupo han sido los generales Julio García Montoya y Raúl Isaías Baduel. Ambos han sido premiados por su papel clave en el contragolpe que devolvió el poder a Chávez con posiciones claves dentro de la FAN. García Montoya se ha convertido en el nuevo comandante en jefe del Ejército y Baduel ha recibido el mando de la IV división de infantería, la unidad más poderosa de las fuerzas terrestres venezolanas.

A partir del regreso de Chávez al poder, los sectores institucionalistas e izquierdistas de las fuerzas armadas han librado una sorda lucha por afianzar su control sobre el aparato defensivo venezolano. La batalla se ha materializado en una cadena de relevos en el seno del Ejército y la Guardia Nacional que ha entregado puestos claves habitualmente ocupados por generales a oficiales con el rango de coronel cuyo principal mérito es la proximidad al régimen. Esta cascada de nombramientos ha puesto de manifiesto la falta de apoyo de Chávez entre el generalato venezolano.

Gobierno y oposición después del golpe del 11-A

El 11-A también ha afectado al juego político entre la administración Chávez y la oposición. En el lado del gobierno, el fallido golpe ha fortalecido a los sectores más extremistas del movimiento bolivariano. El chavismo radical, agrupado en las milicias conocidas como Círculos Bolivarianos, jugó un papel relevante en la derrota de la rebelión militar al lanzar una campaña de disturbios en Caracas que amenazó con cobrar proporciones masivas. Una perspectiva que contribuyó a disuadir a los golpistas de continuar con sus planes para hacerse con el gobierno. Como consecuencia, los dirigentes del ala dura del movimiento bolivariano han ganado relevancia a los ojos de Chávez. Tal ha sido el caso de figuras como el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, o el alcalde del municipio caraqueño de El Libertador, Freddy Bernal.

El reforzamiento del ala radical del régimen ha venido acompañado de la escisión del sector moderado del partido chavista Movimiento V República (MVR). En particular, la actitud antigubernamental se hace cada vez más visible entre un sector de congresistas oficialistas vinculados al ex-ministro del Interior, Luis Miquilena. Esta tendencia

tiene una importancia clave en la medida en que si esta facción disidente suma sus votos a la oposición, el gobierno perdería la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Un nuevo equilibrio de fuerzas que teóricamente abriría la puerta al procesamiento judicial o la destitución de Chávez.

Dentro de la oposición, el descalabro de Carmona en su intento de encaramarse a la presidencia ha forzado la retirada de la escena política de los sectores empresariales reunidos en la patronal Fedecamaras. Bajo estas circunstancias, la oposición se ha estructurado en dos polos. Por un lado, el movimiento sindical agrupado en la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), liderada por Carlos Ortega. Por otra parte, un grupo de directivos de la prensa venezolana como Miguel Henríquez Otero de El Nacional y Rafael Poleo de El Nuevo País. Por encima de este grupo, Gustavo Cisneros como el principal empresario venezolano se ha convertido en una pieza clave de la oposición no sólo por su control de un enorme conglomerado de medios de comunicación sino también por sus enormes recursos económicos y sus excelentes relaciones con la administración Bush.

En este contexto, tras la fallida intentona golpista, la rectificación de la línea política del gobierno anunciada por Chávez ha tenido pocos efectos prácticos. El presidente ha remodelado su gabinete con la aparente intención de inaugurar una etapa de mayor moderación. Pero en realidad, los cambios no han sido sustanciales. Al margen del nombramiento de Lucas Rincón al frente de Defensa, las dos modificaciones principales en el gobierno han sido el relevo de Ramón Rodríguez Chacín al frente del Ministerio de Justicia e Interior y el ascenso de José Vicente Rangel a la vicepresidencia. En lo que respecta a la salida de Rodríguez Chacín, no puede ser interpretada como un gesto de moderación sino más bien como la decisión de frenar los planes de este ex -capitán de navío por afianzar su control sobre el aparato de inteligencia. Además, el nombramiento en su lugar del ex -vicepresidente Diosdado Cabello deja poco lugar a dudas sobre el deseo del presidente de mantener esta cartera clave en manos de un "duro". De hecho, Cabello tuvo un papel clave en la creación de los Círculos Bolivarianos. Solamente el nombramiento de Rangel como vicepresidente puede ser visto como una señal del interés de Chávez por mantener cerca de la jefatura del Estado a un hombre identificado con los intentos de diálogo con la oposición. Pero además, también delata la dependencia del presidente del último operador político de importancia con que todavía cuenta el régimen.

Paralelamente, el diálogo entre el régimen y la oposición no parece haber producido resultados tangibles. Tras la puesta en marcha de un foro de negociación bajo la denominación de Comisión Presidencial para el Diálogo Nacional, las conversaciones se atascaron ante la resistencia del gobierno a aceptar la presencia en la mesa de Carlos Ortega como representante de la CTV. Un rechazo motivado por la negativa gubernamental a dar por válidas las elecciones en las que fue designado el líder sindical. Aunque se han buscado vías para superar este obstáculo, las perspectivas de avances en las conversaciones son escasas dado el enconamiento de las posiciones de chavistas y antichavistas.

Las ambiciones de Rangel

Entretanto, el presidente se enfrenta a la aparición de potenciales adversarios dentro de su propio gobierno. En particular, el vicepresidente Rangel puede aspirar a forzar la destitución de Chávez y reemplazarlo en la jefatura del Estado. Las ambiciones presidenciales de Rangel no son ningún secreto después de haber competido por el cargo en las elecciones de 1973, 1978 y 1983. Ahora puede encontrarse en una excelente posición para conquistarlo por una vía distinta a las urnas. Como vicepresidente cuentan con legitimidad constitucional para hacerse con el poder en caso de renuncia del jefe del Estado. Además, su papel como hombre cercano a Chávez le otorga influencia sobre los partidarios del régimen a la vez que su protagonismo en el diálogo con la oposición le convierte en una figura aceptable para los antichavistas moderados. De este modo, se configura como una alternativa de consenso.

Para llevar a cabo estos planes, Rangel dispone de apoyos en ámbitos claves. Por un lado, ha tejido una red de contactos con las fuerzas armadas durante su estancia en el Ministerio de Defensa antes de asumir la Vicepresidencia. Por otro lado, cuenta con aliados tanto en la Asamblea Nacional como el Tribunal Supremo de Justicia. Ambas instancias serían las responsables de procesar y destituir al presidente por vía constitucional. Sobre esta base, Rangel podría intentar forzar una renuncia de Chávez con ciertos visos de legalidad. En cualquier caso, para avanzar en esta dirección todavía restan dos obstáculos. Por un lado, vencer la resistencia del fiscal general de la República, el chavista Isaías Rodríguez, que jugaría un papel clave en cualquier movimiento para procesar al presidente. Por otra parte, concretar un bloque de apoyo parlamentario que dejase a los partidarios de Chávez en minoría en la Asamblea Nacional. Durante las pasadas semanas, Rodríguez ha sido objeto de una campaña de la oposición destinada a forzar su dimisión. Paralelamente, se han conocido contactos de Rangel con Miquilena, quien controla un bloque de votos claves en el Congreso.

En tales circunstancias, las posibilidades de que Chávez se mantenga en el poder son escasas. La oposición civil cada vez otorga menos credibilidad a un posible diálogo con el régimen y está dispuesta a incrementar la presión contra el presidente. Al mismo tiempo, el creciente poder de Rangel abre la posibilidad de que Chávez tenga que hacer frente a una rebelión dentro de su propio gobierno. En este clima de tensión, el jefe del Estado carece de respaldo entre las fuerzas armadas. No sólo se enfrenta a la oposición de un amplio sector de oficiales de orientación institucionalista. Además, los generales que le apoyaron durante el 11-A como García Montoya o Baduel son críticos con el presidente y podrían terminar por abandonarle.

En cualquier caso, el derrocamiento de Chávez promete ser un episodio violento. Sin duda, los Círculos Bolivarianos tratarán de oponer resistencia a la destitución de su líder. Pero el previsible choque tendrá que ver menos con la defensa de Chávez y más con la lucha por determinar quién lo sustituirá. Los apoyos del régimen bolivariano son escasos. Pero la clase política y el estamento castrense están profundamente divididos sobre la fórmula y la figura que deben reemplazar a Chávez. En consecuencia, resultará inevitable un enfrentamiento de los grupos cercanos al chavismo y la facción populista de las fuerzas armadas con la oposición antichavista y los sectores institucionalistas de la FAN.

España frente a un escenario de inestabilidad prolongada en Venezuela

El hundimiento del régimen bolivariano puede ser la antesala de un periodo de prolongada inestabilidad en Venezuela. Varios factores parecen alimentar esta tendencia. Para empezar, la situación económica promete empeorar, provocando fuertes tensiones sociales. De hecho, la inflación está al alza mientras se espera un crecimiento negativo de un -3,5% del PIB para este año. Por otra parte, la ausencia de líderes y partidos sólidos hace imposible una rearticulación ordenada del escenario político. Finalmente, la politización de la FAN ha erosionado la jerarquía militar haciendo cada vez más difícil a los altos mandos controlar a los oficiales de media y baja graduación. De este modo, se ha abierto la puerta a una paulatina disgregación del estamento castrense que quedaría fragmentado en un creciente número de sectores separados por lealtades personales y filiaciones políticas diversas. Bajo estas condiciones, el derrocamiento de Chávez no daría lugar a un gobierno de amplia base con un respaldo sólido sino que dejaría paso a un gabinete cívico-militar con escaso apoyo y de duración incierta.

Este escenario de inestabilidad prolongada supondrá un reto para la diplomacia española hacia Venezuela. La perspectiva de que las convulsiones en la política venezolana se prolonguen más allá de la caída de Chávez dificultará el mantenimiento de unas relaciones estables entre Madrid y Caracas. De hecho, los intereses españoles sufrirán los vaivenes de un régimen postchavista débil y sometido a constantes presiones. Frente a este escenario, parece conveniente que España ponga en práctica una diplomacia de dos niveles que establezca relaciones con las autoridades gubernamentales al mismo tiempo que profundiza los vínculos con actores no oficiales del ámbito político y económico. Así, al lado de las relaciones diplomáticas formales, resultaría clave dar prioridad al establecimiento de lazos sólidos con sindicalistas o grandes empresarios. Estos contactos servirían para construir compromisos estables con Caracas en la medida en que la influencia de este tipo de figuras no oficiales promete tener más permanencia que la de un gobierno con un respaldo discutible. Sin duda, esta diplomacia informal ya forma parte de la acción exterior española. Pero su potenciación parece clave en un futuro marcado por una elevada inestabilidad como el que se cierne sobre Venezuela.

El Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos es una fundación privada e independiente cuya tarea es servir de foro de análisis y discusión sobre la actualidad internacional, y muy particularmente sobre las relaciones internacionales de España. El Real Instituto Elcano no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los documentos firmados por sus analistas o colaboradores y difundidos en su página web o en cualquier otra publicación.

© *Fundación Real Instituto Elcano* 2011

[Subir ▲](#)